



SENTENCIA ANTICIPADA No. 184

Santiago de Cali, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Procede esta agencia judicial a emitir decisión anticipada¹ dentro de este trámite del proceso **verbal sumario de asignación judicial de apoyo del señor Javier Elías Quijano Moreno** identificado con cédula de ciudadanía No. 16.941.057, iniciado por la señora María Elena Moreno Lasso, identificada con cedula de ciudadanía No. 31.222.450, conforme los siguientes:

ANTECEDENTES

1. SOPORTE FÁCTICO.

El señor Javier Elías Quijano Moreno, nació el 23 de octubre de 1981, hijo de los señores Plutarco Elías Quijano (q.e.p.d.) y María Elena Moreno, unión del que procrearon igualmente a los señores Sandra Liliana Quijano y Javier Elías Quijano.

Que el señor Javier Elías Quijano desde pequeño empezó a tener comportamientos extraños de pleitos de agresividad entre otros; su progenitor por ser de profesión médico identificó el diagnóstico “*esquizofrenia indiferenciada*” y quien fue calificado con un porcentaje del 75% de incapacidad desde los 19 años de edad, mediante resolución de vicepresidencia del seguro social en mayo de 2001. Porcentaje que fue confirmado por la NUEVA EPS en agosto de 2008.

Teniendo en cuenta los episodios de agresividad Javier Elías Quijano tuvo que ser internado en clínicas psiquiátricas por recomendación del galeno tratante.

El 23 de octubre de 2019, se realizó dictamen psiquiátrico que constata el avance en la enfermedad y muestra que Javier Elías no tiene capacidad cognoscitiva normal. Dictamen que se confirma nuevamente en dictamen el 12 de septiembre de 2020.

Que, al fallecer el progenitor de Javier Elías, lo dejó como beneficiario de la pensión de vejez en un 50%, de la cual requiere apoyo para tramitar dicha diligencia tanto

¹ Conforme al art. 278 del C.G.P.



en Colpensiones como en UGPP; de igual forma, para tener una apertura de cuenta de nóminas en bancos, notificarse de resoluciones, reclamar herencia de su padre y en si toda la diligencia jurídica o administrativa.

El señor Javier Elías Quijano Moreno, reside en la actualidad con su progenitora quien se encarga de vigilarlo, cuidarlo y protegerlo y darle todo lo que requiera para su bienestar; lo anterior, teniendo en cuenta que su hermana Sandra Liliana vive fuera del país, quien desde la distancia de su familia esta pendiente de ellos y viaja una o dos veces al año a visitarlos.

EL PETITUM.

Se declare la asignación de apoyo al señor Javier Elías Quijano Moreno a su progenitora María Elena Moreno Lasso y una vez fallezca esta, se designe como sustituta a su hermana Sandra Liliana Quijano Moreno a fin de brindarle apoyo en los trámites relacionados a continuación:

- Tramites y utilización de servicios bancarios,
- Solicitud de pensión de sobreviviente, gestionar, cobrar, y administrar mesada pensional una vez sea reconocida ante Colpensiones y entidad UGPP en su calidad de beneficiario.
- Cobrar subsidios y seguros previamente adquiridos
- Autorizar cambio de tratamientos médicos
- Solicitar servicios de salud, solicitar y reclamar entrega de medicamentos
- Comprender y autorizar tratamientos médicos que se suministren
- Dar a conocer las preferencias médicas en salud
- Realizar trámites ante entidades públicas y privadas cuando este involucrados los intereses del señor Javier Elías Quijano en aras de gestionar y proteger sus derechos patrimoniales y garantías constitucionales. Y represente en la toma de decisiones en el ejercicio de su capacidad legal.

2. ACTUACION PROCESAL



Mediante proveído 976 del 09 de junio de 2021 se ordenó admitir la demanda, decretar la valoración de apoyo al señor Javier Elías Quijano Moreno, ordenar visita socio familiar al hogar del mismo, abstenerse de realizar la notificación al demandado, y notificar al Ministerio Público y Defensora de Familia adscrita al despacho.

En proveído 1237 del 23 de julio de 2021 se ordenó agregar memorial presentado por la parte demandante, reconoció personería a la doctora Rubiela Rentería Palacios, glosar para que obre y conste dictamen de valoración de apoyos del señor Javier Elías Quijano Moreno y se corrió traslado del dictamen antes indicado.

En auto 067 del 19 de enero de 2022, se ordenó glosar y poner en conocimiento de las partes y demás interesados el informe de visita social realizado por la Asistente Social adscrita al despacho, imprimir la demanda al trámite de asignación de apoyo judicial con vocación de permanencia, tener como pruebas todos y cada uno de los documentos aportados, requerir a la parte demandante para que adecue el trámite.

En proveído 1077 del 1 de junio de 2022 se ordenó tener adecuada la demanda, correr traslado al Procurador, designar a la doctora Madeleine Andrade Martínez como curador ad-litem del señor Javier Elías Quijano Moreno, agregar al expediente el pronunciamiento del Ministerio Público y reconocer personería jurídica a la apoderada de la parte demandante.

En auto 1881 del 12 de septiembre de 2022 se ordenó tener por aceptado el cargo de curadora ad-litem, doctora Madeleine Andrade Martínez, glosar la contestación de la demanda y una vez ejecutoriada la providencia pasa a despacho para dictar sentencia anticipada conforme o dispone el artículo 278 del C.G.P.

CONSIDERACIONES

1. Decisiones parciales de validez.

Se debe verificar si encuentran reunidos los presupuestos procesales y materiales para dictar una decisión de fondo, así pues, los primeros de estos son: 1) capacidad para ser parte. 2) capacidad procesal 3) jurisdicción y competencia. y 4) demanda



en forma y los segundos aluden a: i) legitimación en la causa. ii) debida acumulación de pretensiones iii) no configuración de fenómenos tales como: caducidad, prescripción, transacción o pleito pendiente y adecuación del trámite.

Al respecto, se percibe que los solicitantes tienen la capacidad para ser parte como personas naturales y mayores de edad, quienes no están sometidos a guarda o persona de apoyo alguna; de igual forma, éstos se encuentran representados por apoderado judicial, cumpliendo así con el derecho de postulación; la demanda está en forma y esta apreciación persiste después de admitida, como quiera que cumple con los requisitos generales y especiales establecidos en los artículos 82 y ss. y 396 del C.G.P, además si en cuenta se tiene que esta autoridad judicial es competente para dirimir el asunto en primera instancia, conforme a lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 22 (factor funcional) y en el numeral 13 del artículo 28 del Estatuto Procesal Civil vigente (factor territorial).

Ahora bien, frente a los presupuestos materiales debe decirse que los solicitantes tienen legitimación en la causa e interés por ser la progenitora del señor Javier Elías Quijano Moreno.

A la demanda se le dio el trámite verbal sumario previsto para esta clase de procesos en el Código General del Proceso y las pretensiones que se solicitan están acordes con las disposiciones contempladas en el artículo 396 ejusdem.

De otro lado, no se observan causales de nulidad procesal que deban declararse de oficio o subsanarse, como quiera que no ha vencido el término de duración del proceso según lo dispuesto en los artículos 90 y 121 Ibídem y la demanda se notificó en debida forma.

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

¿Determinar si con las pruebas practicadas y allegadas a este juicio, se evidencia que el señor Javier Elías Quijano Moreno requiere que se le asigne apoyo judicial para ser representado en los siguientes actos:



- Tramites y utilización de servicios bancarios,
- Solicitud de pensión de sobreviviente, gestionar, cobrar, y administrar mesada pensional una vez sea reconocida ante Colpensiones y entidad UGPP en su calidad de beneficiario.
- Cobrar subsidios y seguros previamente adquiridos
- Autorizar cambio de tratamientos médicos
- Solicitar servicios de salud, solicitar y reclamar entrega de medicamentos
- Comprender y autorizar tratamientos médicos que se suministren
- Dar a conocer las preferencias médicas en salud
- Realizar trámites ante entidades públicas y privadas cuando este involucrados los intereses del señor Javier Elías Quijano en aras de gestionar y proteger sus derechos patrimoniales y garantías constitucionales. Y represente en la toma de decisiones en el ejercicio de su capacidad legal.

¿Determinar si la señora María Elena Moreno Lasso es idónea para representar a su descendiente Javier Elías Quijano Moreno, y brindar el apoyo definitivo al mismo?

3. PREMISAS NORMATIVAS.

Sea lo primero indicar que es factible emitir fallo anticipado cuando no hubiere pruebas por practicar, imposición que hace al Juez el art. 278 del C.G. del P, como ocurre en éste caso pues una vez revisado el expediente se considera que se puede proferir decisión de fondo con el caudal probatorio suficientemente allegado al plenario.

La Ley 1996 de 2019 garantiza el respeto de la dignidad humana, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas y finalmente, el derecho a la no discriminación; dichos principios y derechos se encuentran establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad², la cual fue ratificada por Colombia, y con la que se busca eliminar modelos de prescindencia para convertir a la persona con discapacidad en el centro y en protagonista de su proyecto de vida.

² Convención ratificada por Colombia el día 10 de mayo de 2011



Con la nueva legislación se introduce una serie de instrumentos para garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, donde se les permite realizar actos jurídicos, formalizadas a través de las figuras tales como directivas anticipadas y la adjudicación de apoyo, que puede cumplirse vía judicial o a través de acuerdos de apoyo (*a través de escritura pública*) donde se establece cuál será su red de apoyo, las personas designadas para prestar el apoyo y el apoyo a prestar.

Ahora, frente a la capacidad legal en la normatividad en cita, todas las personas gozaran de dicha cabida, pues cabe recordar que en otrora se les denominada a las personas con discapacidad *-absoluta o relativa-* a quienes se le sustraía de manera total su capacidad legal y de ejercicio, sin que pudieran tomar alguna decisión relevante en su vida; contrario sensu, con la nueva normatividad que eliminó tal limitación señalada en los artículos 1503 y 1504 del Código Civil y reivindica un derecho que de antaño les había sido negado; resaltando con el reconocimiento la toma de decisiones sobre su vida y actos jurídicos expresando su voluntad.³

Bajo este tópico de limitación a las personas con discapacidad de su capacidad jurídica Vallejo, Hernández y Posso⁴, señala que:

“La capacidad de ejercicio era un derecho vedado para las personas con discapacidad, pues pese a ser titulares de derechos y obligaciones, se les limitaba la posibilidad de ejercicio por cuenta propia, implicándoles vivir bajo el yugo de un modelo asistencialista que limitaba su autonomía y capacidad de decisión sobre los asuntos que afectaban su proceso de vida, quedando relegado el ejercicio de ese derecho fundamental a tercero quienes tomaban las decisiones por ellos”

Panorama que se introduce en el artículo 6º de la Ley 1996 de 2019 al establecer que todas las personas con discapacidad se presumen capaces, así;

“Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin

³ Figura directiva anticipadas y la adjudicación de apoyo

⁴ 2016, pag.5



distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos.

En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona.

La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral.

PARÁGRAFO. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma.”

Recordando además que la capacidad legal de una persona, se encuentra descrita en el artículo 1502 ídem, que señala:

“Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:

- 1o.) que sea legalmente capaz.
- 2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.
- 3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.
- 4o.) que tenga una causa lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra.”

Normatividad, que tiene como modelo el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad⁵ que centra el

⁵ Igual reconocimiento como persona ante la ley 1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al



derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad y el concepto de toma de decisiones con apoyo.

Conviene señalar que en sentencia STC16392-2019 del 4 de diciembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia, en sala de Casación Civil, Magistrado Ponente, Aroldo Quiroz Monsalvo señaló que:

“4.1 Lo primero que debe señalar la Corte es que, en cuanto a la diversidad regulatoria sobre las personas con discapacidad, doctrinariamente se han distinguido tres modelos a saber:

- (i) **prescindencia**, en el que para la sociedad, en razón de sus sistema de valores, se considera a estas personas como improductivas, ajenas a su funcionamiento y que, en lugar de aportar a su desarrollo, deben ser sujetos de asistencia.

En este modelo, las necesidades de las personas discapacitadas son satisfechas con el internamiento en instituciones especializadas y segregadas, en las que se les dota de una atención mínima, muchas veces de forma gratuita, sin pretensiones de justicia social;

- (ii) **rehabilitador**, bajo el cual los hombres o mujeres en discapacidad se estiman, en atención, a sus deficiencias o dificultades, como enfermas necesitadas de curación por medio de tratamientos médicos comprobados o, incluso, por desarrollar.

Este paradigma propugna por rehabilitación física, siquica o sensorial del discapacitado, mediante la intervención galénica, con el fin de normalizarlos según los estándares usuales de la sociedad; y

apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria

8



- (iii) **social**, se le concibe no como un discapacitado o disminuido, sino como una persona que pueda servir a la colectividad, al igual que las demás, respetándoseles su diferencia y garantizándoles sus derechos fundamentales, entre otros, a la dignidad humana, autonomía, igualdad y libertad.

Se les concibe como sujetos con derechos, dotados de plenas garantías, que tienen un rol dentro de la sociedad que debe ser desarrollado, en condiciones de igualdad, inclusión y participación.

(...)

4.3. No obstante, la nueva Ley 1996 de 2019 (por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad) prefirió el antedicho modelo social, a partir de los imperativos constitucionales y legales de protección e inclusión social de las personas mayores con discapacidad mental, según los cuales éstas no deben ser tratadas como pacientes sino como verdaderos ciudadanos y sujetos de derechos, que requieren no que se les sustituya o anule en la toma de sus decisiones, sino que se les apoye para ello, dando prelación a su autodeterminación, dejando de lado el obstáculo señalado con antelación que, partiendo de apreciaciones de su capacidad mental, les restringía el uso de su capacidad legal plena.

En efecto, esta Ley fijó como su objeto <<establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma>> (artículo 1º); bajo el entendido que <<todas las personas con discapacidad son sujetos y obligaciones y **tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna** e independiente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos>>; resaltando que <<en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona>> (se destacó- canon 6º).



(...)

7.3. Finalmente, para los procesos en curso, como el aquí auscultado -partiendo del hecho de que la interdicción del actor fue provisoria, en tanto se dispuso como medida temporal mediante auto interlocutorio, sin que exista sentencia al respecto, la nueva ley previó su suspensión inmediata hasta el 26 de agosto de 2021, con la precisión de que, en cualquier momento, aquélla podrá levantarse por el juez, en casos de urgencia, para decretar « medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad» (precepto 55).

La última precisión anotada a espacio conlleva a que deba aclararse que, así reanudado el juicio, los juzgadores naturales tendrán que adoptar sus decisiones bajo los lineamientos de la nueva regulación, dada su consabida vigencia general inmediata, lo que se ratifica con la prohibición de regresión en materia de derechos humanos, derivada doctrinariamente del principio de progresividad, cuyo fundamento normativo tiene génesis en los artículos 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966- y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -suscrita el 22 de noviembre de 1969-. De allí que en esos asuntos en trámite -sin decisión de fondo respecto a las pretensiones-, a pesar de la suspensión de que fueron objeto por imperativo legal, le compete a los falladores naturales pronunciarse respecto de las situaciones directamente relacionadas con las provisionales interdicción, inhabilitación o designación de curador, sin que puedan excusar en tal suspensión, por mandato de la entrada en vigor de la ley 1996 de 2019 y la prohibición de regresividad de los derechos humanos, pues el primero otorga una protección mejorada en cuanto al ejercicio de la capacidad legal plena para las personas mayores de edad con discapacidad, sin que so pretexto de una regla procesal pueda vaciarse de contenido esta máxima, so pena de desconocer la barrera infranqueable de la prohibición de regreso en la protección de los derechos humanos.



Por tanto, aunque en el párrafo del referido canon 6° de la Ley 1996 se especificó que «el reconocimiento de la capacidad legal plena [allí] previsto... aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de /esa]... ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma» (se subrayó), un análisis sistemático y teleológico de dicha normativa, resaltando el contenido de este último precepto y el fin concreto de la Ley misma, el cual no es otro que garantizar la capacidad plena que le asiste a las personas en comento, permite dejar por sentado que la aludida remisión legal gobierna, exclusivamente, aquellos casos en que las medidas «de interdicción o inhabilitación» fueron adoptadas a través de sentencia definitiva, no así en los procesos en curso -incluido en aquí cuestionado- en que se hubiera emitido una decisión interlocutoria, pues aquí deberá privilegiarse la interpretación más favorable a las personas que históricamente se han visto discriminadas y, en algunos casos, segregadas.”

Por otro lado, cabe recordar las normas internacionales que salvaguardan los derechos de discriminación los cuales deben ser tenidos en cuenta en cada decisión judicial tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Deficiente Mental, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

En cuanto a la Adjudicación Judicial de Apoyo que es el objeto de este pronunciamiento, es pertinente señalar que: El 26 de agosto de 2019 fue sancionada la Ley 1996, a través de la cual se establece el Régimen para el Ejercicio de la Capacidad Legal de las Personas mayores de edad con Discapacidad. Con la expedición de esta ley, fueron derogados los artículos 1 a 48, 50 a 52, 55, 64 y 90 de la ley 1306 de 2009, y modificado, entre otros, el artículo 586 del C.G. del P., con lo cual fue derogada la interdicción y rehabilitación de personas con discapacidad mental absoluta.



La normativa en cita, estableció medidas para garantizar el derecho y tutela judicial efectiva, a las personas con discapacidad para que pudieran realizar actos jurídicos de manera independiente.

Frente a lo antedicho, la Corte Suprema de Justicia en auto Auto AC-2532020 (11001020300020190414700), del 31 de enero de 2020, Magistrado Ponente, doctor Aroldo Quiroz Monsalvo, dispuso que:

“2. Por otro lado, con el propósito que los sujetos mayores de edad con discapacidad puedan ejercer su libertad de autodeterminación, la ley ha establecido un sistema de apoyos que pueden ser adjudicados de conformidad con las reglas procesales que se explican a continuación.

La nueva normativa consagró dos clases de trámites judiciales con la finalidad descrita, a saber: **(i)** el de adjudicación judicial de apoyos transitorios; y **(ii)** el de adjudicación judicial de apoyos con vocación de permanencia.

El primero de los procesos mencionados, caracterizado porque las medidas respectivas son temporales, se encuentra regulado en el artículo 54 de la ley, del que se desprende que es, en principio, un trámite excepcional previsto para sujetos «absolutamente imposibilitad[os] para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio», que sigue las reglas del trámite verbal sumario y que busca proveer una o varias personas de apoyo, siempre que medie solicitud ante la autoridad judicial competente por parte de «una persona con interés legítimo... que acredite una relación de confianza con la persona titular del acto». Obviamente, en aras de satisfacer la garantía del debido proceso y el libre desarrollo de la personalidad, la persona con discapacidad mayor de edad o, en palabras de la ley, el «titular del acto jurídico», puede oponerse a la solicitud de apoyos transitorios.

Por disposición expresa de la regla 52 de la ley 1996 el proceso de adjudicación de apoyos transitorios está vigente desde la entrada en vigencia de este cuerpo normativo (2019) y seguirá en vigor hasta el año



2021. Lo anterior significa que el «*proceso [verbal sumario] de adjudicación judicial de apoyos transitorio*» previsto en el artículo 54 de la mencionada ley, para quienes se encuentran en la actualidad, si goza de vigor normativo.”

4. Caso concreto -Fácticas probadas-

El estado de salud del señor Javier Elías Quijano Moreno conforme las valoraciones aportadas en el libelo genitor se diagnosticó “*Esquizofrenia diferenciada*” .

Por otro lado, de la valoración de apoyo realizada por el equipo interdisciplinario conformado por el doctor Iván Alberto Osorio Sabogal (psiquiatra), Maritza Patiño (Trabajadora social) e Isabel Cristina Giraldo López (Psicóloga Clínica), se conceptuó que:

“COMPLEJIDAD DEL CUADRO QUE AFECTA LA INTERPRETACION DE VOLUNTAD Y PREFERENCIAS. Es consciente de sus necesidades básicas y las solicita: alimento, baño, corte de cabello y aseo en general, pero no tiene mayor iniciativa. Reconoce las personas cercanas e interactúa con ellas de forma superficial solo en lo que le preguntan y responde con palabras o gestos. Hay una respuesta organizada ante lo que le piden que implique ordenes de una y dos acciones. La interacción es muy limitada, aunque ha mejorado con las intervenciones de terapia, enfermería y fármacos neuropsiquiátricos. No es factible con el nivel de comunicación alcanzado por el paciente determinar su proyecto de vida, sus argumentos, actitudes, actuaciones anteriores, opiniones o creencias. SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES. El paciente puede tomar decisiones frente a asuntos sencillos mediante su capacidad comunicativa y de esta manera es capaz de solicitar alimentos, líquidos, aseo y fómites, pero esto no significa que sea capaz de tomar decisiones sobre cuestiones más abstractas que requieren considerar argumentos y elegir entre diversas opciones. Este tipo de elaboraciones no pueden alcanzarse debido a su condición cognitiva. AUTONOMIA PARA: CUIDADO PERSONAL. Es independiente en baño y vestido, pero debe ser supervisado. alimentación sin déficit. Aseo personal con supervisión. No hace resistencia a los elementos de ayuda. Se comunica y pide lo que necesita con gestos, reconoce sus artículos personales y vela por su cuidado. Elige su ropa y compra a su gusto, pero solicita compañía de la madre. Reconoce las rutinas del día, aunque su horario no es exacto ya que se levanta al medio día. es dependiente en su atención de cuidado de su ropa. Alimento y aseo del hogar. Es pulcro en su aseo el cual se afecta un poco en



JUZGADO DECIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
Rad: 76-001-31-10-010-2021-00222-00. ASIGNACION DE APOYO PARA JAVIER ELIAS QUIJANO MORENO

periodo de crisis psicótica. MOVILIDAD EN CASA. Puede movilizarse por sus medios. Es consciente de sus necesidades básicas. Hace algunas tareas propuestas, acepta las actividades ocupacionales y administrar su tiempo libre: Tiene muy poca iniciativa para cambios. Refiere preocupación por sus objetos personales. Hay una respuesta organizada ante lo que le piden. Suele ser pasivo en casa, busca la madre y comparte sus preocupaciones e inquietudes. En crisis no reconoce su descompensación, pero si es consciente que toma medicación y que la necesita. REQUIERE APOYO COMPLETO PARA: MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y TRANSPORTE PUBLICO La ubicación espacial esta conservada, peor demanda compañía para salir, evita estar solo y busca la protección. SEGURIDAD PERSONALES un paciente que necesita cuidado permanente por sus limitaciones en el contenido del pensamiento y su juicio el cual se altera por periodos. Reconocerlos peligros, pero presenta alteración en su juicio lo que afecta su contacto con la realidad y su toma de decisión. Demanda la protección de su familiar. MANEJO DE SU DINERO Y PERTENENCIAS. No pide dinero, pero tiene algún interés por los bienes que son de su propiedad como ropa o insumos de aseo. El decide lo que le gusta y sus familiares tratan de complacerlo en esto. Es prudente en gastos. MANEJO DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Es completamente dependiente de sus cuidados médicos. Acepta la medicación sin dificultad.”

Concepto del cual describe que el señor Javier Elías Quijano Moreno requiere apoyo completo para movilidad en la ciudad y transporte público, seguridad persona, manejo de dinero y pertenencias y manejo de medicamentos y alimentos como lo señaló el equipo interdisciplinario, conformado por los profesionales antes señalados.

Es por ello, que, del análisis conjunto de las probanzas arrojadas al proceso, conformado por la documental y pericial, que es de cardinal importancia, como pruebas insustituibles y de rigurosa práctica en procesos de este linaje, las cuales no fueron materia de objeción, se adquiere la certeza del estado de discapacidad del señor Javier Elías Quijano Moreno para realizar sus actividades tales como apoyo descritos en el trámite del proceso, permitiendo concluir el apoyo definitivo designando a la señora María Elena Moreno Lasso.

Apoyo que comparte el Procurador 8º Judicial II Infancia Adolescencia y Familia de Cali cuando indica que:

- *Que el señor Javier Quijada Moreno NO está “absolutamente imposibilitado para manifestar su voluntad y preferencias”, ni imposibilitado para “para ejercer su capacidad jurídica y esto conlleve a la vulneración o amenaza de sus derechos por parte de un tercero”, en los*



JUZGADO DECIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
Rad: 76-001-31-10-010-2021-00222-00. ASIGNACION DE APOYO PARA JAVIER ELIAS QUIJANO MORENO

términos del artículo 38 de la ley 1996 de 2019. Sin embargo, su diálogo es “pobre, con perseveraciones, a veces incoherente e irrelevante por puerilidad

- *Sugerencias frente a los aspectos en los cuales puede necesitar apoyo para realizar sus actividades en los distintos espacios de su vida.*
- *Sugerencias para el desarrollo de sus capacidades*
- *Un informe general sobre el proyecto de vida y la interpretación sobre sus preferencias en relación con el lugar para vivir, sus metas y aspiraciones, las compañías y relaciones significativas con que cuenta.*
- *Se concluye que para las distintas necesidades de la señora María Teresa las personas de apoyo sugeridas son María Helena Quijano (madre) y Sandra Liliana Quijano Moreno (hermana biológica)*
- *Por lo cual el Ministerio Público considera que el informe CUMPLE con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1996 de 2019”.*

Ahora bien, respecto del nombramiento como sustituta de la señora María Elena Moreno Lasso, a la hermana del señor Quijano Moreno, señora Sandra Liliana Quijano Moreno; es pertinente indicarle que la Ley 1996 de 2019 no estableció la sustitución de apoyos, es por ello que no accederá esta funcionaria judicial a la pretensión aludida.

Para tal efecto se nombrará a la señora María Helena Moreno Lasso quien quedó demostrado que es la persona que no tiene conflicto de intereses ni influencia indebida y es la designada por demás hermanos, quienes están de acuerdo que salvaguardará la autonomía y voluntad de su hermano discapacitado, señor Javier Elías Quijano Moreno, quien deberá además siempre respetar en todo momento las preferencias de su ascendiente en lugar de las de intentar a las que a su interés convenga, conforme lo dispone el artículo 46 de la Ley 1996 de 2019.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

RESUELVE:

PRIMERO. - DECLARAR que el señor **Javier Elías Quijano Moreno**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.941.057 de Cali, nacido el 23 de octubre de 1981, requiere **designación de apoyo judicial definitivo**, para la realización de los siguientes actos:



- Tramites y utilización de servicios bancarios,
- Solicitud de pensión de sobreviviente, gestionar, cobrar, y administrar mesada pensional una vez sea reconocida ante Colpensiones y entidad UGPP en su calidad de beneficiario.
- Cobrar subsidios y seguros previamente adquiridos
- Autorizar cambio de tratamientos médicos
- Solicitar servicios de salud, solicitar y reclamar entrega de medicamentos
- Comprender y autorizar tratamientos médicos que se suministren
- Dar a conocer las preferencias médicas en salud
- Realizar trámites ante entidades públicas y privadas cuando este involucrados los intereses del señor Javier Elías Quijano en aras de gestionar y proteger sus derechos patrimoniales y garantías constitucionales. Y represente en la toma de decisiones en el ejercicio de su capacidad legal.

SEGUNDO. - DESIGNAR a la señora **María Elena Moreno Lasso**, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.222.450 de Cali en calidad de progenitora del señor **Javier Elías Quijano Moreno** como la persona de apoyo para celebrar los actos anteriormente descritos. Se le comunica en el presente acto la designación.

TERCERO. – ORDENAR a la señora **María Elena Moreno Lasso**, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.222.450 de Cali tomar posesión en el cargo en el término de cinco (05) días, cumpliendo así los fines previstos en el artículo 38 de la Ley 1996 de 2019.

CUARTO. - ORDENAR INSCRIBIR esta providencia en el libro de varios del registro del estado civil de las personas y en el registro civil de nacimiento del señor **Javier Elías Quijano Moreno**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.941.057 de Cali, nacido el 23 de octubre de 1981, inscripto en la Notaria Tercera del Circulo de Cali, bajo el indicativo serial No. 61689493; para así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 1260 de 1970, conforme lo dispone el artículo 51 de la Ley 1996 de 2019, para lo cual se compulsará copia auténtica de esta providencia.

QUINTO. - DISPONER la notificación de esta sentencia al señor Agente del Ministerio Público adscrito a este Despacho.



SÉXTO. - La señora **María Elena Moreno Lasso**, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.222.450 de Cali, deberá respetar las reglas que establecen los artículos 45 a 50 de la Ley 1996 de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANNE ALEXANDRA ARTEAGA TAPIA

JUEZ

02

Firmado Por:
Anne Alexandra Arteaga Tapia
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 010 Oral
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **918bd55a669d23b770e32f7d771406f355709d6eb973f68cefb3496b53519ff3**

Documento generado en 23/09/2022 09:07:32 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>